SEÑOR (a)
JUEZ (a) MUNICIPAL DE SANTA MARTA (REPARTO)
E. S. D.

REF.: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO Y ACCESO A CARGOS PUBLICOS POR MÉRITO.

ACCIONANTE: JOHAN SEBASTIAN USECHE BELTRÁN

ACCIONADO: ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA

JOHAN SEBASTIAN USECHE BELTRÁN, mayor identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.270.484 expedida en Bogotá D.C., con domicilio en la misma ciudad, actuando en nombre propio, a través del presente escrito allego **ACCIÓN DE TUTELA**, de conformidad con el Art. 86 de la Constitución Política, con el fin de que sean amparados mis derechos fundamentales al **DEBIDO PROCESO, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR MÉRITO y TRABAJO**, en mi calidad de elegible al cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, identificado con el Código OPEC No. 73672 pertenecientes a la Carrera Administrativa de la planta de personal de la **ALCALDIA DE SANTA MARTA- MAGDALENA**, en donde se ofertaron SEIS (06) vacantes definitivas, dentro del PROCESO DE SELECCIÓN No. 910 de 2018, MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 1ª A 4ª CATEGORÍA) en el marco del concurso de méritos adelantado por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL con ayuda de la ESAP; acudo a su Despacho para la protección de los derechos fundamentales referidos los cuales me han sido flagrantemente vulnerados por la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA – MAGDALENA-, al omitir y desconocer el término máximo de 10 días hábiles para mi nombramiento en periodo de prueba establecido en el artículo 9 del Acuerdo 562 del 05 de enero 2016 y conforme a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: La COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL “CNSC”, mediante el Acuerdo CNSC – 20181000008216 del 7 de diciembre de 2018, modificado por: Acuerdo No. CNSC – 20191000002526 del 2 de mayo de 2019 y Acuerdo 20201000000386 del 27 de febrero de 2020, convocó y estableció las reglas para el Concurso Abierto de Méritos público de méritos para proveer definitivamente empleos de carrera administrativa ofertados por la ALCALDÍA DE SANTA MARTA - MAGDALENA, PROCESO DE SELECCIÓN NO. 910 DE 2018 - MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 1a A 4a CATEGORÍA).

SEGUNDO: Participé en la convocatoria, que organizó la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL “CNSC”, para el cargo de carrera administrativa denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, identificado con el Código OPEC No. 73672 pertenecientes a la Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDIA DE SANTA MARTA-MAGDALENA, se ofertaron SEIS (06) vacantes definitivas, en la cual supere todas las pruebas y etapas del concurso de méritos (conocimientos básicos y funcionales, comportamentales, de antecedentes y requisitos mínimos), por lo que me destaque y ocupe la posición número (6) **SEIS** en el concurso meritario, evidenciado en la lista de elegibles del cargo para la

OPEC No. 73672 en la Resolución № 4802 3 de abril de 2023, 2023RES-400.300.24-025739.

TERCERO: La Resolución № 4802 3 de abril de 2023, 2023RES-400.300.24-025739, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, manifiesta lo siguiente:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer **seis (6)** vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**, Código **219**, Grado **2**, identificado con el Código OPEC No. **73672**, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA - MAGDALENA, PROCESO DE SELECCIÓN NO. 910 DE 2018 - MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 1ª A 4ª CATEGORÍA)**, así:

POSICIÓN	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	PUNTAJE
1	72046091	ADID ENRIQUE	PEREZ RODRIGUEZ	72.99
2	1081761370	DORIS EDITH	MONTERO MORA	69.23
3	72000532	ROBERTO GUILLERMO	BARLIZA SÁNCHEZ	69.12
4	1082878924	JAMESSON ALFONSO	ODUBER PLATA	63.81
5	1102870221	KEVIN JAVIER	TORRES BENITEZ	63.38
6	9850765	CRISTIAN ALBERTO	CEBALLOS LOPEZ	63.33
6	1014270484	JOHAN SEBASTIAN	USECHE BELTRÁN	63.33
7	73434097	RONY MIGUEL	RAMIREZ ROMANI	62.84

CUARTO: Una vez la CNSC conformó y publico la lista de elegibles mediante Resolución № 4802 del 3 de abril de 2023, 2023RES-400.300.24- 025739, la Comisión de Personal de la ALCALDÍA de SANTA MARTA solicitó la exclusión de mi nombre de la lista de elegibles argumentando inconsistencias en la información contenida en las certificaciones de vecindad y las certificaciones laborales aportadas, sin embargo, se resalta que la solicitudes de exclusión fueron presentadas por la ALCALDIA DE SANTA MARTA sin cumplir los requisitos legales y sobre el 99% de los participantes-elegibles de la Resolución № 4802 del 3 de abril de 2023, evidenciándose una acción temeraria y total desconocimiento de los procesos, así como la gestión y la validación de información y documentos realizados de manera previa por la CNSC y la ESAP, especialmente durante la Verificación de Requisitos Mínimos.

QUINTO: La COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, encargada de resolver las Solicitudes de Exclusión, mediante AUTO 1081 del 8 de septiembre de 2023 resolvió:

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la solicitud de exclusión presentada por “Los Representantes Principales y Suplentes de los Empleados de Carrera Administrativa ante la Comisión de Personal” de la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA (MAGDALENA)**, en el marco del Proceso de Selección No. 910 de 2018 - Convocatoria Municipios Priorizados para el Posconflicto (Municipios de 1ª a 4ª Categoría), respecto de los elegibles que se relacionan a continuación, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.

No. de Orden	OPEC	DENOMINACIÓN CÓDIGO y GRADO	VACANTES A PROVEER	POSICIÓN EN LA LISTA	NOMBRES DE LOS CONCURSANTES E IDENTIFICACIÓN
1	73672	Denominación: Profesional Universitario Código: 219 Grado: 2	Seis (6)	6	
2	73672	Denominación: Profesional Universitario Código: 219 Grado: 2	Seis (6)	6	

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente Auto a la Comisión de Personal de la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA (MAGDALENA)**, a través de su presidente o de quien haga sus veces, a la dirección electrónica notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co, haciéndole saber que contra el mismo procede el recurso de reposición, el cual podrá presentar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión⁶, en la sede de la CNSC ubicada en la Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7, de la ciudad Bogotá D.C, o a través de la página www.cnsc.gov.co, enlace Ventanilla Única, o del correo electrónico atencionalciudadano@cnsc.gov.co.

PARÁGRAFO 1º: La notificación por medio electrónico se surtirá conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 67º del (CPACA), para lo cual la Comisión de Personal deberá manifestar su aceptación a través del correo electrónico notificaciones@cnsc.gov.co.

PARÁGRAFO 2º: En caso de no constar la aceptación de la Comisión de Personal para ser notificada vía electrónica, deberá procederse a su notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

SEXTO: Una vez notificado el auto de archivo a las partes interesadas, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, con el ánimo de seguir dilatando los nombramientos en periodo de prueba, a través de la Comisión de Personal presentó radicado 2023RE182095 del 22 de septiembre de 2023 con Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación en contra del Auto No. 1081 del 08 de septiembre de 2023, el cual fue rechazado por improcedente por parte de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL como consta en la **Resolución No. 16183 del 10 de noviembre del 2023**, la cual resolvió lo siguiente:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar el Recurso de Reposición interpuesto por la señora **GREYSI DEL SOCORRO ÁVILA CAMPO** en calidad de representante principal del Empleador y Presidente de la Comisión de Personal de la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, contra los Autos 1074,1078,1076,1064,1079,1071,1077,1103,1099,1100,1097,1081,1082,1085,1084,1087,1080,1092,1089,1094,1083,1086,1091,1094,1090,1088,1095,1093,1098,1096 y 1106 del mes de septiembre del 2023, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar por improcedente el recurso de apelación, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución, a los elegibles señalado, a través del aplicativo SIMO dispuesto para la Convocatoria Municipios Priorizados Para el Post Conflicto (Municipios de 1ª y 4ª Categoría).

ARTÍCULO CUARTO. Notificar la presente decisión, a través de la Secretaría General de la CNSC, a la presidente de la **Comisión de Personal** de la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA (MAGDALENA)**, o a quien haga sus veces, en la dirección electrónica: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar la presente decisión, a través de la Secretaría General de la CNSC, al Jefe de Talento Humano, o a quien haga sus veces, de la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA (MAGDALENA)**, al correo electrónico: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente Acto Administrativo en la página www.cnsc.gov.co en cumplimiento del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, norma relativa a los mecanismos de publicidad de las Convocatorias.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno y rige a partir de su firmeza.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 10 de noviembre del 2023

SEPTIMO: El 27 de noviembre del año en curso la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL expidió constancia de ejecutoria de la Resolución No. 16183 del 10 de noviembre del 2023 y se registra mi firmeza individual en la lista de elegibles para la OPEC 73672, como se evidencia en el Banco Nacional de Listas de Elegibles BNLE, fecha desde la cual se encuentra debidamente comunicada a los interesados (elegible y Alcaldía de Santa Marta).

Lista de elegibles del número de empleo 73672							
Posición	Tipo documento	Nro. identificación	Nombres	Apellidos	Puntaje	Fecha firmeza	Tipo firmeza
1	Cédula de Ciudadanía	72046091	ADID ENRIQUE	PEREZ RODRIGUEZ	72.99	6 sept. 2023	Firmeza individual
2	Cédula de Ciudadanía	1081761370	DORIS EDITH	MONTERO MORA	69.23	11 oct. 2023	Firmeza individual
3	Cédula de Ciudadanía	72000532	ROBERTO GUILLERMO	BARLIZA SÁNCHEZ	69.12	20 abr. 2023	Firmeza individual
4	Cédula de Ciudadanía	1082878924	JAMESSON ALFONSO	ODUBER PLATA	63.81	20 oct. 2023	Firmeza individual
5	Cédula de Ciudadanía	1102870221	KEVIN JAVIER	TORRES BENITEZ	63.38	11 oct. 2023	Firmeza individual
6	Cédula de Ciudadanía	1014270484	JOHAN SEBASTIAN	USECHE BELTRÁN	63.33	27 nov. 2023	Firmeza individual
6	Cédula de Ciudadanía	9850765	CRISTIAN ALBERTO	CEBALLOS LOPEZ	63.33	27 nov. 2023	Firmeza individual

OCTAVO: Tengo un derecho adquirido - y no una mera expectativa- consistente en ser nombrado y posesionado en periodo de prueba, conforme el artículo 58 constitucional, al tener firmeza individual dentro de la lista de elegibles conformada mediante **Resolución No 4802 3 de abril de 2023**, 2023RES-400.300.24-025739 para el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, identificado con el Código OPEC No. 73672, y en concordancia con la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional, contenida en la Sentencia SU-913 de 2009 (pág. 145).

NOVENO: El pasado martes 12 de diciembre de 2023, se cumplieron los 10 días hábiles “**máximos**” (palabra utilizada en el art. 9 Acuerdo 562 del 05 de enero 2016) que tenía la ALCALDÍA DE SANTA MARTA, para realizar mi nombramiento en periodo de prueba, no obstante, a la fecha de presentación de esta acción, la entidad accionada “ALCALDÍA DE SANTA MARTA” no ha procedido a efectuar dicha actuación de nombramiento y posesión en periodo de prueba:

*“**ARTÍCULO 9º.** Nombramiento en período de prueba. A partir del día hábil siguiente en que la CNSC comunique a la entidad para la que se realizó la Convocatoria la publicación de la firmeza de una lista de elegibles, ésta cuenta con un término máximo de diez (10) días hábiles para que en estricto orden de mérito se produzca el nombramiento en período de prueba en el empleo objeto del concurso y solo para las vacantes para las cuales se conformó la respectiva lista de elegibles, tal como lo dispone el artículo 32 del Decreto 1227 de 2005 (contenido en el Decreto 1083 de 2015).”*

DECIMO: A pesar de la firmeza de mi posición del fecha 27 de noviembre de 2023, en la cual ocupó el puesto SEXTO (6) dentro de la lista de elegibles expedida mediante la Resolución № 4802 3 de abril de 2023, 2023RES-400.300.24-025739, la ALCALDÍA DE SANTA MARTA continua la línea de su comportamiento, y se ha rehusado al cumplimiento de los términos para el nombramiento y posesión, ya que las mismas obedecen a una actitud reiterativa, que resulta violatoria de derechos fundamentales, pues sobre mí y los demás elegibles ganadores del Concurso en la Alcaldía de Santa Marta, se presentaron solicitudes de exclusiones y recursos improcedentes de manera masiva, abusiva e injustificada a través de su Comisión de Personal, desde la publicación de las listas de elegibles el mes de abril de 2023, dilatando así el proceso por más de (8) meses.

DÉCIMO PRIMERO: La ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA no tiene justificación para abstenerse de realizar los nombramientos y posesión bajo ningún concepto, y viene vulnerando los derechos de los elegibles, a quienes nos han obligado a presentar acciones de tutela para lograr los nombramientos por vía judicial, aun cuando se está frente a un derecho adquirido.

DÉCIMO SEGUNDO: La ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA con sus actuaciones y omisiones viene vulnerando múltiples disposiciones normativas y en particular mis derechos fundamentales, como el derecho al ACCESO A LOS CARGOS PUBLICOS, TRABAJO, DEBIDO PROCESO E IGUALDAD, además los principios de objetividad, imparcialidad, mínimo vital, mérito, confianza legítima y seguridad jurídica por lo que acudo en causa propia y ante usted señor juez, con el fin de que se amparen mis derechos.

PRETENSIONES

De acuerdo con las anteriores consideraciones, sírvase su Señoría resolver en sentencia definitiva las siguientes disposiciones a mi favor.

PRIMERA: Ruego al Despacho AMPARAR mis derechos constitucionales fundamentales A LA IGUALDAD (art. 13 constitucional), TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS (art. 25 constitucional), DEBIDO PROCESO (art. 29 constitucional), ACCESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA (art. 40 numeral 7 y art. 125 constitucional) junto con los principios de objetividad, imparcialidad, mínimo vital, mérito, confianza legítima y seguridad jurídica, conforme lo establecido en las diferentes disposiciones normativas y la múltiple jurisprudencia de la Corte Constitucional.

SEGUNDA: En concordancia con lo anterior, se ordene a la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de la tutela, y conforme a la firmeza

individual de la RESOLUCIÓN №4802 3 de abril de 2023, produzca y notifique el nombramiento en periodo de prueba en el cargo de carrera administrativa a JOHAN SEBASTIAN USECHE BELTRAN identificado con CC 1.014.270.484 de Bogotá D.C. dentro de la OPEC No. 73672 quien ostenta el puesto número SE IS (6) de la lista de elegibles expedida mediante RESOLUCIÓN №4802 3 de abril de 2023, para proveer SEIS (6) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTA MARTA - MAGDALENA, PROCESO DE SELECCIÓN NO. 910 DE 2018 - MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 1ª A 4ª CATEGORÍA).

TERCERA: Las demás que considere el despacho en uso de las facultades ultra y extra petita.

SOLICITUD ESPECIAL

PRIMERO: Vincular a LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, ya que es necesaria su intervención y apreciación en el presente proceso y análogos, estableciendo directrices claras para las comisiones de personal y la Entidad en general, ya que en posición de garante y como entidad administradora de la Carrera Administrativa encargada de la realización de los concursos de méritos, debe instar por el cumplimiento de las normas y acuerdos que expide con la finalidad proveer estos cargos, mas aun cuando la ALCALDIA DE SANTA MARTA ha presentado múltiples actuaciones y comportamientos que contrarían el debido proceso, el mérito, y en general el acceso a los cargos públicos, pues los elegibles dentro de la OPEC No. 73672 han tenido que acudir a esta acción constitucional para el cumplimiento por parte de la Entidad.

SEGUNDA: Vincular a los terceros con intereses, que actualmente se encuentran en posición de elegibilidad, por ende, con derechos constitucionales adquiridos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La presente acción de tutela tiene como fundamento el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1591 y Decreto 2591 de 1991, mediante los cuales se establece y regula el procedimiento de acción de tutela para la protección de los derechos constitucionales; al respecto se establece constitucionalmente que toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Además de los anteriores preceptos, la presente acción de tutela tiene como fundamentos las siguientes consideraciones normativas y jurisprudenciales:

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ELEGIBLE

Según lo ha señalado el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Acción de Tutela resulta procedente para la protección de los derechos fundamentales de aquellas personas que nos encontramos dentro de una Lista de Elegibles de Concurso de Méritos que tenga firmeza, es decir, con un derecho adquirido habiendo o no pronunciamiento administrativo (en este caso hay omisión y vencimiento del término establecido en el artículo 9 del Acuerdo 562 del 05 de enero 2016)

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

- RESPECTO AL DERECHO AL ACCESO A CARGOS PUBLICOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y que ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. La finalidad de la carrera, según la Sentencia T-682 de 2016, es que el Estado pueda contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos.

A partir del concepto según el cual al Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública". Del mismo modo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia C-040 de 1995, explicó detalladamente las etapas que, por regla general, conforman los concursos públicos para proveer los empleos de carrera, esto es, que debe estar precedida de las fases de (1) convocatoria, (ii) reclutamiento, (iii) aplicación de pruebas e instrumentos de selección y (iv) elaboración de lista de elegibles, enfatizando en que aquellas deben adelantarse con apego al principio de buena fe y los derechos a la igualdad y al debido proceso.

Como consecuencia de lo anterior, la administración luego de agotadas las diversas fases del concurso clasifica a los diversos concursantes mediante la conformación de lista de elegibles, está expidiendo un acto administrativo de contenido particular que genera derechos subjetivos que, por regla general, no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, a menos que sea necesarios por motivos de utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización previa al afectado. **Así pues, se considera que existe vulneración al derecho en comento, cuando de manera arbitraria la autoridad nominadora encargada de efectuar el nombramiento y posesión de quien figure en primer lugar conforme con el listado de elegibles, sin mediar justa causa para ello, se abstenga de darle estricto cumplimiento.**

Para la Honorable Corte Constitucional, el acto administrativo a través del cual se conforman las listas de elegibles dentro de un concurso de méritos, una vez en firme, crean derechos subjetivos de carácter particular y concreto que no pueden ser desconocidos, por lo que en Sentencia SU-913 de 2009 expuso lo siguiente:

"Cuando la Administración asigna a un concursante puntaje al finalizar cada una de las fases que comprende el concurso, expide un acto administrativo de carácter particular y concreto, en la medida que surte un efecto inmediato, directo y subjetivo respecto del destinatario; lo mismo ocurre cuando consolida dichos resultados mediante la conformación de una lista de elegibles; acto administrativo que a pesar de su naturaleza plural en cuanto lo integra un conjunto de destinatarios, crea derechos singulares respecto de cada una las personas que la conforman (...) Por su parte, la estabilidad de la lista de elegibles en tanto acto administrativo particular y concreto se obtiene una vez este haya sido notificado al destinatario y se encuentre en firme con carácter ejecutivo y ejecutorio - Artículo 64 del C.C.A.-, caso en el cual no podrá ser revocado por la Administración sin el consentimiento expreso y escrito del particular Artículo 73 del C.C.A.-, salvo que se compruebe que el acto ocurrió por medios ilegales o tratándose del silencio administrativo generador de actos fictos en los términos del artículo 69 del mismo estatuto sea evidente su oposición a la Constitución Política o a la Ley, contrario al interés público o social o cause agravio injustificado una persona". Sentencia SU-913 de 2009, Sala Plena, Corte Constitucional.

- **RESPECTO DEL DERECHO AL TRABAJO**

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación social, el derecho que tiene toda persona a un trabajo en condiciones dignas y justas, bajo una especial protección del Estado; lo cual implica la salvaguarda de las condiciones del trabajo en cualquiera de sus modalidades, mas no la obligatoriedad de ofrecer un trabajo a todos y cada uno de los ciudadanos.

El alcance del derecho fundamental al trabajo y la protección de su núcleo esencial, ha sido ampliamente desarrollado por diferentes pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, entre ellos, la Sentencia No. T-611 de 2001, en donde se indica:

"El derecho al trabajo tiene una doble dimensión, individual y colectiva, reconocida en la Constitución. El aspecto individual se refiere a la facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio en condiciones dignas y justas. En la dimensión colectiva implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo porque de lo contrario el ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa (...). La interpretación constitucional recae sobre un objeto de mayor complejidad el derecho al trabajo como uno de los valores esenciales de nuestra organización política, fundamento del Estado social de derecho, reconocido como derecho fundamental que debe ser protegido en todas sus modalidades y asegurar el derecho de toda persona al desempeño en condiciones dignas y justas, así como los principios mínimos fundamentales a los que debe sujetarse el legislador en su desarrollo y la obligación del Estado del desarrollo de políticas de empleo hacen del derecho al trabajo un derecho de central importancia para el respeto de la condición humana y cumplimiento del fin de las instituciones. La interpretación que surge de la dimensión constitucional descrita no persigue la solución de un conflicto o diferencia entre el trabajador y el empresario para hallar la solución correcta sino pretende, la definición de campos de posibilidades para resolver controversias entre derechos o principios fundamentales. La protección del derecho al trabajo desde la interpretación constitucional tiene el propósito de optimizar un mandato en las más altas condiciones de racionalidad y proporcionalidad sin convertirlo en el derecho frente al cual los demás deben ceder".

Así las cosas, se decanta que lo que se protege por parte de la Carta Política, son las condiciones de dignidad y justicia, en el trabajo que desarrolle cada individuo, sin que ello implique intervención para garantizar el ofrecimiento pleno de acceso a un trabajo o labor, o la intervención para resolver conflictos puntuales de la relación laboral propiamente dicha.

Es importante tener en cuenta lo que ha señalado la Corte Constitucional respecto del derecho al trabajo en relación con el acceso a los **cargos públicos**, al considerar que: **"dicha garantía se materializa en cabeza del ganador del concurso, a quien le asiste el derecho de ser nombrado; en este sentido, a la posibilidad de acceder a un empleo se suma la garantía del deber estatal de impedir que terceros restrinjan dicha opción."**

Al tratar esta materia en sentencia T-625 de 2000, el Tribunal Constitucional indicó: **"La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el ejercicio de una actividad laboral legítima"**.

De lo anterior se vislumbra que la persona que supera las pruebas del concurso público de méritos se convierte en el titular del derecho al trabajo, y, por ende, tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el

cual concursó, pues sólo en este momento el carácter subjetivo del derecho al trabajo logra concretarse con certeza a favor del ganador.

En síntesis, el derecho de acceder a cargos públicos está ligado a la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de presentarse a concursar una vez haya cumplido los requisitos previstos en la respectiva convocatoria. Por su parte, el derecho al trabajo, en las situaciones de acceso a cargos públicos se materializa cuando se crea en el titular el nacimiento del derecho subjetivo, es decir, cuando en virtud del mérito y la capacidad del aspirante obtiene el mejor puntaje (o está dentro de los puntajes con posición de elegible respecto de los cargos a proveer), de lo cual se sigue o deviene su nombramiento y posesión. En este sentido lo reiterado en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional cuando ha señalado que listas de elegibles en firme son inmodificables y generan derechos adquiridos.

En este sentido la Corte Constitucional a través de la Sentencia de Unificación SU - 089 de 1999 expresó:

*“No se requiere un profundo análisis de los términos usados por el Constituyente para concluir, entonces, que, salvo los casos expresamente definidos por el legislador o por la propia Carta, cuando alguien aspire a desempeñar un cargo al servicio del Estado, debe concursar; que los resultados del concurso son determinantes para los fines del nombramiento; que, por supuesto, la calificación obtenida dentro de aquél obliga al nominador, quien no podrá desatender para dar un trato inmerecido - a favor o en contra a quienes han participado en el proceso de selección; y que, correlativamente, **esos resultados generan derechos en cabeza de los concursantes que obtienen los más altos puntajes.**”*

- **RESPECTO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO**

De conformidad con la jurisprudencia constitucional el debido proceso es un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias consagradas por una Ley, de aplicación obligatoria en cualquier actuación del Estado, bien sea judicial o administrativa, además de ser un límite al ejercicio del poder público, representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada.

Frente al debido proceso en los procesos de selección de empleos públicos, la Sala Plena de la Corporación en sentencia SU-913 de 2009 determinó que:

“(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del

agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser desconocido.

De forma que NO puede someterse a los elegibles a plazos inciertos que ponen en entredicho el debido proceso administrativo, más cuando existen términos y procedimientos legales claramente preestablecidos a través de la múltiple normativa que regula el tema, de manera que las entidades encargadas de realizar los nombramientos deben someterse a unas condiciones, procedimientos y plazos para tal fin, pues de lo contrario se afectan los derechos adquiridos de los elegibles por mérito.

En conclusión, para el presente caso, es el derecho al debido proceso, el que establece los términos y procedimientos para efecto de nombrar los funcionarios que han superado un proceso de selección bajo el principio del merito y por consiguiente abre paso para la garantía del derecho de acceso a empleos públicos y derecho al trabajo, los cuales en conjunto resultan vulnerados con las actuaciones y omisiones de la ALCALDIA DE SANTA MARTA posterior a la firmeza de la lista de elegibles dentro de la OPEC No. 73672 del PROCESO DE SELECCIÓN No. 910 de 2018, MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 1ª A 4ª CATEGORÍA).

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

Me encuentro legitimado para solicitar la Tutela de mis Derechos fundamentales: TRABAJO, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, DEBIDO PROCESO E IGUALDAD, por cuanto participe y culmine las etapas del concurso público PROCESO DE SELECCIÓN No. 910 de 2018, MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 1ª A 4ª CATEGORÍA), de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, con firmeza y derechos adquiridos dentro de la lista de elegibles, ocupando el sexto (6º) lugar de SEIS (6) posiciones de elegibilidad dentro del empleo con denominación, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 2, identificado con el Código OPEC No. 73672 pertenecientes a la Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDIA DE SANTA MARTA- MAGDALENA.

COMPETENCIA

Es su Despacho el competente por lo establecido en la ley para conocer de la presente acción de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, el decreto 2591 de 1991 y sus normas complementarias.

DECLARACIÓN JURADA

Bajo la gravedad del juramento afirmo que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos relacionados con el presente mecanismo judicial de protección a derechos.

PRUEBAS:

Señor Juez, solicito se tengan como medios de prueba los siguientes documentos:

1. ACUERDO No. 20181000008216 DEL 07/12/2018 "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de SANTA MARTA - MAGDALENA PROCESO DE SELECCIÓN No. 910 de 2018 - MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5ª Y 6ª CATEGORÍA)".